



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

**Medio de control:** Ejecutivo  
**Radicado:** 15001 33 33 008 2018 00009 00  
**Demandante:** Florida Valderrama de Molina  
**Demandado:** Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR

Ingresa el proceso con respuestas a requerimientos realizados por el Despacho, de distintas entidades financieras, para efecto de resolver sobre decreto medida cautelar de embargo y retención de dineros que pueda tener la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR-, en las siguientes entidades financieras: **Banco de Bogotá, Banco de Colombia, Banco BBVA, Banco Colpatria, Banco Caja Social de Ahorros, Banco Agrario de Colombia y Banco Popular**, que requiere el ejecutante en el escrito de demanda, por lo que se procederá a resolver de conformidad con las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Para efectos de procesos ejecutivos en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, la Ley 1437 de 2011 no estableció un procedimiento especial, por lo que le son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso, por remisión normativa del artículo 306 del CPACA., así las cosas, las medidas cautelares en este tipo de proceso se entienden reguladas por este cuerpo normativo

Respecto al decreto de medidas cautelares de embargo en procesos ejecutivos, el Código General del Proceso en su artículo 599 señala:

*“Art. 599.- Embargo y secuestro. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.*

*(...)*

*El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o venalidad.*

*(...)”*

El artículo 593 ibídem, señala respecto al procedimiento para el decreto de embargo de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios lo siguiente:

*“Art. 593.- Embargos. Para efectuar embargos se procederá así:*

*(...)*

*10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso 1º del numeral 4º, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento (50%). Aquéllos deberán constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.”*

2. Por su parte el artículo 594 del CGP, frente al decreto de medidas cautelares sobre bienes inembargables, en su parágrafo, refiere a las excepciones al principio de inembargabilidad, señalando

*Parágrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables.*

En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos.

En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo.

En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

Mediante este texto legal, se incorpora a la ley formal, criterio desarrollado jurisprudencialmente de que la inembargabilidad de recursos públicos no es absoluta, ya que admite excepciones derivadas del mismo ordenamiento jurídico.

3. La medida cautelar solicitada por el apoderado de la parte ejecutante consiste en el embargo de dineros de las cuentas de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que en el presente caso pretenderían asegurar el pago de dineros por los cuales se libró mandamiento de pago en auto del 7 de junio de 2018, que se encuentra ejecutoriada, esto es:

*Por la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA SIETE PESOS (\$877.237)**, por concepto de los **INTERESES MORATORIOS** causados y no pagados respecto de sumas de dinero reconocidas en el fallo objeto de esta ejecución a favor de la ejecutante **FLORINDA VALDERRAMA DE MOLINA**, entre la fecha de ejecutoria de la sentencia dictada en el proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho N° 15001 3333 004 2005 00117 00, por el Juzgado Cuarto Administrativo de del Circuito de Tunja, esto es el 18 de diciembre de 2015 y hasta la fecha del cumplimiento de la sentencia: 1 de diciembre de 2016, en aplicación de lo normado en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.*

4. Para efecto de verificar la existencia y precisar la naturaleza de los bienes sobre los que se pretendía el embargo, el Despacho requirió a las entidades financieras señaladas por el accionante para que suministraran información sobre productos financieros de los que fuera titular la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, a lo que los bancos se pronunciaron de la siguiente manera:

- Los Bancos, Caja Social, Colpatria y Bancolombia (fls. 26, 27 y 33), manifestaron que esa entidad no contaba con productos financieros a su nombre en esas entidades.

- El Banco BBVA (fls. 28-30) relacionó tres (3) cuentas corrientes que tendrían como titular a CASUR, respecto de las cuales afirmó que según manifestaciones de su cliente manejarían recursos de naturaleza inembargable, el Banco anexó a esta respuesta constancias expedidas por la Coordinadora del grupo de presupuesto de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional que señalan que las rentas y recursos de CASUR, independientemente de su denominación o de la cuenta bancaria en la que se encuentren estaban incorporadas al presupuesto general de la Nación, y por tanto, serían inembargables en los términos del artículo 6 de la Ley 179 de 1994 y del artículo 40 de la Ley 1815 de 2016.

- El Banco Agrario de Colombia (fl. 31) no señaló que productos en su entidad tenían como titular a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, solo indicó que las cuentas de CASUR se manejan para el pago de sueldos de retiro.

- El Banco de Bogotá (fl. 32) señala que existen dos (2) cuentas corrientes en las que figura como titular CASUR, precisando que la entidad manifiesta que los dineros manejados en esos productos eran inembargables.

- El Banco Popular (fls. 36-39) informó de la existencia de una cuenta corriente y una cuenta de ahorros a nombre de CASUR y adjunta comunicación enviada por la coordinadora del Grupo de Tesorería de CASUR en la se señaló que esos recursos eran inembargables según disposición del artículo 6 de la Ley 179 de 1994, por ser recursos de la Nación destinados al pago de asignaciones de retiro.

5. En desarrollo de lo anterior, y teniendo en cuenta que en el presente asunto se pretende determinar si los recursos administrados por la entidad ejecutada pueden ser objeto de medidas cautelares en el trámite del proceso ejecutivo, el Despacho traerá a colación el artículo 594 del C.G.P., que enuncia dentro de los bienes inembargables los siguientes:

*"ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

*1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.*

*(...)*

*PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia..."*

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 594 del CGP, les dio el carácter de inembargables a los recursos económicos que integran el Sistema de Seguridad Social, estos son los de salud, pensiones y riesgos profesionales, la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 2013, reiteró que estas normas deben ser interpretadas de manera armónica con la integridad del ordenamiento jurídico, lo que obliga para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo, de los que se han inferido excepciones a la regla general de inembargabilidad<sup>1</sup> como las siguientes:

- (i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas<sup>2</sup>.
- (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos<sup>3</sup>.
- (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.<sup>4</sup>
- (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)<sup>5</sup>

<sup>1</sup> La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

<sup>2</sup> C-546 de 1992

<sup>3</sup> En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Precisó que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

<sup>4</sup> La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses.

<sup>5</sup> C-793 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 21 de julio de 2017, que estudió una petición de medida cautelar, consistente en el embargo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, precisó que tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional prevén que la regla de inembargabilidad de los recursos públicos, debe ceder ante la satisfacción de obligaciones de estirpe laboral, contenidas en una sentencia judicial, eventos en los cuales se puede acudir ante el juez administrativo para perseguir su pago, siempre y cuando la deudora no hubiese adoptado las medidas para satisfacerlos en los términos del artículo 192 del CPACA o 177 del CCA, según corresponda; en efecto, señaló el Consejo de Estado:

*"(...) En suma, tanto la legislación vigente como la jurisprudencia constitucional que la ha depurado establecen que, **no obstante el principio de inembargabilidad de los recursos públicos sirve de base para el desarrollo del Estado social de derecho, su aplicación cede cuando de satisfacer ciertas obligaciones se trata, puntualmente si estas son de estirpe laboral, se derivan de sentencias judiciales o constan en títulos emanados de la Administración.***

*Por ello, en el evento de acudir ante un juez de la República para perseguir el pago de esa gama de créditos, los recursos del presupuesto general podrán sustraerse del patrimonio de la Nación, en igual medida a otros bienes preliminarmente inembargables, cuando la entidad deudora no haya adoptado las medidas necesarias para satisfacerlos en los términos de los artículos 192 del CPACA o 177 del CCA, según corresponda, salvo cuando el crédito sea de naturaleza contractual, caso en el que se aplicarán los términos del contrato (...).*

*En conclusión, frente a eventos relacionados con la satisfacción de créditos u obligaciones de carácter laboral, así como aquellos derivados de contratos estatales y los reconocidos en fallos judiciales, el principio general de inembargabilidad de los recursos públicos pierde su supremacía, pues su afectación es necesaria para hacer efectivos otros principios de orden fundamental como la igualdad, la dignidad humana y el derecho al trabajo, cuya garantía también corre por cuenta del Estado (...)"<sup>6</sup>*

De igual forma, la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 23 de noviembre de 2017, señaló en cuanto a la aplicación del principio de inembargabilidad que ampara los bienes, las rentas y los derechos que componen el Presupuesto General de la Nación, particularmente en el escenario de incumplimiento de una sentencia judicial, lo siguiente:

*"(...) Como se ve, si bien el principio de inembargabilidad ampara los bienes, las rentas y los derechos que componen el presupuesto general de la Nación, el mismo no es una garantía de aplicación incondicional y absoluta, pues, **cuando el juez observe que el funcionario competente no desplegó las conductas tendientes a pagar una sentencia dentro del plazo legal establecido para tal efecto, bien puede decretar las órdenes de embargo que considere necesarias conforme a la ley para garantizar el respeto por los derechos reconocidos a terceros en la respectiva sentencia (.. )**.*

*No se pierde de vista que el escenario al que alude el decreto 111 de 1996 es el de las sentencias proferidas por un juez de lo contencioso administrativo, pues es el único facultado por la Constitución y la ley para imponer condenas al Estado, **de ahí que la excepción al principio de inembargabilidad sólo se pueda entender respecto de las sentencias proferidas por dicha jurisdicción**, sin perjuicio de las proferidas por órganos internacionales, en los procesos de responsabilidad del Estado colombiano, caso en el cual se seguirá lo consagrado en la ley 288 de 1996<sup>7</sup> (...)"<sup>8</sup>.*

Criterio reiterado por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 15 de diciembre de 2017, en donde, en sede de acción de tutela, señaló la obligatoriedad del precedente fijado por la Corte Constitucional, en tratándose de la aplicabilidad de las excepciones al principio general de inembargabilidad de los recursos públicos:

<sup>6</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección B. Exp.: 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014). Consejero Sustanciador: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Medio de control: Proceso ejecutivo.

<sup>7</sup> En este evento, no basta la existencia de la respectiva sentencia proferida por un órgano internacional de derechos humanos para hacer ejecutables las obligaciones que de ella se deriven, pues para tal efecto, es necesario que en el ámbito interno, se haya celebrado un acuerdo conciliatorio entre el Gobierno Nacional y los beneficiarios de la respectiva condena, aprobado por el Tribunal Administrativo competente, o que, en su defecto, exista una providencia expedida por esta última autoridad judicial, mediante la cual se haya decidido sobre la liquidación de perjuicios, por la vía incidental, como lo consagra el artículo 1º, 7, 8 y 11 de la ley 288 de 1996.

<sup>8</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 88001-23-31-000-2001-00028-01(58870)

"(...) De conformidad con lo analizado en precedencia, la Sala considera que el Juzgado al denegar el embargo de los dineros depositados en la cuenta de Fondos Especiales, los cuales hacen parte del presupuesto general de la Nación, para respaldar el pago de obligaciones laborales reconocidas en una sentencia judicial, no sólo **desconoció el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en relación con el principio de inembargabilidad de los recursos públicos y sus excepciones**, sino que también incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 594 del CGP, lo que implica la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor.

**Lo anterior, habida cuenta de que como se ha insistido a lo largo de esta sentencia, la prohibición de embargo de los recursos públicos siempre ha estado presente en nuestro ordenamiento jurídico y ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional, la cual ha indicado de manera reiterada, pacífica y uniforme cómo deben ser interpretadas las disposiciones que contienen esta regla y ha fijado las excepciones a la misma.**

La Sala destaca que el hecho de que el aludido principio fuese incluido nuevamente en el CGP y el CPACA, no implica per se que fueron derogadas las demás disposiciones que también lo contenían, salvo las previstas en el CPC y el CCA, ni que se deba desconocer la interpretación que de las mismas efectuó la Corte, **máxime si se tiene en cuenta que el fin perseguido en todas ellas es el mismo, que no es otro que el de ordenar la prohibición de embargar las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, cuya existencia en el ordenamiento jurídico está condicionada a la interpretación que ha hecho la Corte y que, conforme se afirmó en la sentencia C-543 de 2013, siguen vigentes e incluso deben ser atendidas por los operadores judiciales para la aplicación del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 del CGP, aunado a que esta última disposición permite invocar excepciones a la regla general siempre y cuando estén contenidas en la ley (...)»<sup>9</sup>.**

Soportado en esos precedentes jurisprudenciales el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 25 de junio de 2018, concluyó que es viable el embargo de recursos públicos, aun de los integrados en el presupuesto General de la Nación "cuando tal determinación sea necesaria a efectos de satisfacer ciertas obligaciones, particularmente cuando éstas son i) de contenido laboral, fi) se derivan de una sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre y cuando el ejecutado no hubiese adoptado las medidas para satisfacerlos en los términos del artículo 192 del OPACA o 177 del CCA o, iii) consten en títulos emanados de la administración."

Eventos en los que se consideró que el principio de inembargabilidad de los recursos del Estado debía ceder, pues las entidades estatales habrían desconocido previsiones legales que les imponían el cumplimiento de las providencias judiciales y actos administrativos en que se reconocen acreencias laborales.

6. En el caso concreto, se tiene que en medio de control ejecutivo este Despacho libró mandamiento de pago con base en sentencia proferida por este Juzgado dentro del Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho N° 15001333300420050011700 por la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA SIETE PESOS (\$877.237)**, adeudado por concepto de intereses causados y no pagados entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha del cumplimiento de la misma, esto es, de 18 de diciembre de 2015 y hasta el 1 de diciembre de 2016, en aplicación de lo normado en los artículos 192 y 195 del CPACA.

Con base en lo anterior, como quiera que la solicitud de la medida cautelar de embargo de las cuentas de Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, elevada por la parte ejecutante tiene como finalidad materializar el pago de una obligación derivada de una providencia judicial, considera el Despacho que nos encontramos ante un presupuesto de excepción al principio de inembargabilidad, en el que debe materializarse el cumplimiento de decisiones judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones, por lo resulta procedente acceder al decreto de tal medida.

<sup>9</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01532-01(AC)

Por tanto, el Despacho decretará el embargo y retención de dineros depositados en la cuentas corriente N° 110-070-0037-7 de la que es titular **la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional** -CASUR- con NIT 899.999.073-7, en el Banco Popular<sup>10</sup>, en favor de la demandante **Florinda Valderrama de Molina** identificada con cédula de ciudadanía N° 28.526.173 expedida en la ciudad de Ibagué; para la efectos de materialización de la medida, se atenderá a lo establecido por el artículo 593 del CGP en su numeral 10, por lo que se dispondrá que por Secretaría se oficie al Gerente de la entidad bancaria a fin de que se sirvan retener los dineros allí depositados, en la cuantía que se señalara a continuación y ponerlos a disposición de este juzgado en la cuenta de depósitos judiciales N° 150012045004 del Banco Agrario de Colombia, dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la correspondiente comunicación.

En cuanto al monto a recaudar, se deberá aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 599 del C.G.P., norma especial para efectos de medidas cautelares en proceso ejecutivos, en el sentido de limitar el monto del embargo “a lo necesario”, para el efecto deberá tenerse en cuenta que la suma por la que se libró el mandamiento de pago (\$877.237) corresponde a intereses adeudados a la demandante respecto de los cuales se dispuso su indexación hasta la fecha de pago efectivo de manera que se trata de una suma que no sufrirá un incremento significativo hasta la materialización de la medida, por lo que el Despacho se limitara la medida a UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000).

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

#### RESUELVE:

**PRIMERO: DECRETAR** el embargo y retención de los dineros que se encuentran en la cuenta corriente N° 110-070-0037-7 del Banco Popular, de la que es titular **la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional** -CASUR- con NIT 899.999.073-7.

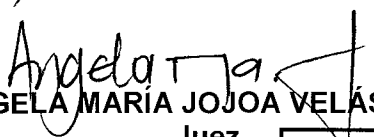
**SEGUNDO: Limitar** el monto del embargo a la suma de **un millón de pesos (\$1.000.000)**.

**TERCERO:** Por Secretaria, **oficiar** al Gerente del Banco Popular, a fin de que se sirvan retener los dineros depositados en la cuenta corriente N° 110-070-0037-7 de que sea titular **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional** -CASUR- con NIT 899.999.073-7., hasta por el valor de un millón de pesos (\$1.000.000), y ponerlos a disposición del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja, depositándolos dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación en la cuenta de depósitos judiciales N° 150012045004 del Banco Agrario de Colombia, en favor de la demandante **Florinda Valderrama de Molina** identificada con cédula de ciudadanía N° 28.526.173 expedida en la ciudad de Ibagué.

Secretaría comunicará esta decisión a la entidad financiera Banco Popular, advirtiéndole que la inobservancia de la orden impartida le hará incurrir en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, según prescripción del parágrafo 2 del artículo 593 del CGP.

**CUARTO:** Por Secretaria, **dar** cumplimiento inmediato a ésta medida antes de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 del C.G.P.

Notifíquese y cúmplase.

  
**ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ**  
Juez

<sup>10</sup>Cesco

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° <u>61</u> De Hoy 15 de noviembre de 2018 A LAS 8:00 a.m.
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

<sup>10</sup> Cuenta referenciada por el Banco Popular en oficio 933E-05350-2018 de 10 de septiembre de 2018 obrante a folio 38 del cuaderno de medidas cautelares.

<sup>11</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 15 de noviembre de 2018 en la página web [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co). Ferney Mauricio Díaz Hernández - Secretario